

Ciudad de México a 19 de marzo de 2025
CEAVICDMX/199/2025

LIC. EDGAR ALEJANDRO GÓMEZ JAIMES
COORDINADOR DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS
PRESENTE.

En autos del JUICIO DE AMPARO 1300/2024, promovido GABRIELA HERNÁNDEZ ARREOLA, ante el juzgado PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y en atención al OFICIO: 9254/2025 signado por la Secretaría del Juzgado, y recepcionado en esta Comisión el 12 de marzo de este año, se le solicita atender lo acordado por el Juzgado de Distrito, marcando copia del cumplimiento a esta oficina.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración lo anterior es necesario contestar en un plazo razonable.

En ese sentido, atienda en los términos procesales de las leyes de la materia, de manera general, al margen de prever la variada gama de casos que son atendidos por esta Comisión Ejecutiva cuasi-jurisdiccional, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que se conocen.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Por ello, esta Comisión, garante comprometida con la tutela de los derechos humanos confiados, requiere cumplir en los términos requeridos o bien manifieste la imposibilidad en caso de existir exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, fundamentando el carácter excepcional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Lic. Ernesto Alvarado Ruiz
Comisionado Ejecutivo de Atención a
Víctimas de la Ciudad de México.

Elaboró: RRE

Revisó: CVFC

		CEAVI COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
FECHA		
19/03/25		
RECIBIDO		
RECIBE:	DSJ	HORA: 17:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TRAMITE MESA-IV

CONSTANCIA de notificación que se hace de la
SENTENCIA, del diez de marzo de dos mil veinticinco,
dictada en el cuaderno PRINCIPAL del juicio de amparo
número 1300/2024-IV, promovido por Gabriela Hernandez
Arreola.

SENTENCIA

1. 9253/2025 COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
2. 9254/2025 COORDINADOR DEL REGISTRO LOCAL DE
VÍCTIMAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE EL
PRESENTE OFICIO, QUE LA DETERMINACIÓN QUE SE ORDENA NOTIFICAR
POR MEDIO DEL MISMO SE ENCUENTRA ANEXA JUNTO CON LAS
CORRESPONDIENTES EVIDENCIAS CRIPTOGRÁFICAS DE LA SECRETARÍA
Y TITULAR DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL.

SE APERCIBE A LA AUTORIDAD QUE EN EL CASO DE QUE SE NIEGUE A
RECIBIR LOS OFICIOS RELATIVOS SIN CAUSA JUSTIFICADA, CON
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE
AMPARO, SE TENDRÁN POR HECHAS LAS NOTIFICACIONES, Y SI A PESAR
DE ESO SUBSISTE LA NEGATIVA, SE LE IMPONDRÁ MULTA DE CIENTO
UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN EN SU VALOR DIARIO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 245 DE LA REFERIDA LEGISLACIÓN.



RECIBI
WALTER
12-03-25
14:00 hr

TELEFONO
155



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 2

"2025, Año de la Mujer Indígena"

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
1300/2024-IV
QUEJOSA: GABRIELA HERNÁNDEZ
ARREOLA

JUEZA MINERVA HERLINDA MENDOZA CRUZ
SECRETARIA: EMMA CRISTINA CARLOS AVALOS

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Primera fase. Apertura

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del diez de marzo de dos mil veinticinco, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, ante la presencia de la Jueza de Distrito Minerva Herlinda Mendoza Cruz, asistida de la secretaria Emma Cristina Carlos Avalos, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo se abre la audiencia de manera pública y se hace constar que no comparecen las partes.

Segunda fase. Relación de constancias

Acto seguido la secretaria certifica que se procedió a dar lectura y relacionar las constancias que obran en el expediente, las cuales se tienen por reproducidas sin necesidad de transcribirlas íntegramente de conformidad con la jurisprudencia PC.II.P. J/8 K del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito que este juzgado comparte, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVE QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE" (registro 2017786).

Tercera fase. Pruebas

I. Documentales. De conformidad con el artículo 119 de la

SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADO DE GUERRERO

la audiencia, se tienen como pruebas documentales de las partes en el presente juicio, las que ya obraban en autos.

Al respecto se acuerda tenerlas por desahogadas conforme a su propia y especial naturaleza en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia.

Cuarta fase. Alegatos

Atento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que ninguna parte formuló alegatos.

Quinta fase. Sentencia

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1300/2024-IV, promovido por Gabriela Hernández Arreola por propio derecho, contra de los actos reclamados Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y otras autoridades.

RESULTANDO;

Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el *cuatro de julio de dos mil veinticuatro*, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos especificados en la parte considerativa de esta sentencia.

Segundo. Turno y admisión. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que, por auto de *ocho de julio siguiente*, la registró bajo el expediente indicado al rubro, la admitió a trámite, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por último, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia



Cuarto. Admisión de ampliación. El cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la ampliación de demanda respecto del Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, por la emisión del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y,

CONSIDERANDO;

Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues los actos reclamados son de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades de la misma materia; habida cuenta que la demanda fue presentada en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito.

Segundo. Fijación de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo es un todo y que, por ende, su análisis no debe limitarse al escrito inicial sino que también debe incluir el de sus documentos y anexos, así como el del escrito por medio del cual es aclarada¹.

¹ Son aplicables los siguientes criterios:

DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es oscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierte alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley

Por tanto, los juzgadores de amparo deben analizar e interpretar tales elementos para atender la pretensión que contienen desde el punto de vista material, no únicamente formal, así como deben prescindir de los calificativos que en ellos se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De ahí que deben cumplir las siguientes exigencias.

En primer lugar, interpretar la demanda con un sentido de liberalidad no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y, de tal manera, armonizar los datos y elementos que la conforman sin cambiar su alcance y contenido; es decir, examinar sus elementos y establecer qué es lo que pretende conseguir mediante el juicio de amparo.

En segundo lugar, a la luz de la intención identificada, verificar cuáles son los actos que causan perjuicio a la parte quejosa según sus conceptos de violación y al margen de que hubieran sido formalmente señalados como reclamados; esto es, a *contrario sensu*, descartar los que no la perjudiquen y los que no estén vinculados con su propósito.

En tercer lugar, identificada la pretensión material de la parte quejosa y depurados los actos reclamados en función de su relación con ella, es necesario armonizar los datos de la demanda con toda la información del expediente a fin de atender a lo que dicha parte quiso decir —a su causa de pedir— para lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto.

De modo que los juzgadores de amparo están obligados a superar la valoración literal del capítulo respectivo y a interpretar integralmente las constancias del expediente para precisar los actos reclamados —la base de la litis del juicio constitucional— únicamente a partir de lo que la parte quejosa efectivamente pretende reclamar².

² Son aplicables los siguientes criterios:

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impeler una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Jurisprudencia P.J. 40/2010 (registro 192097).

ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE INTEGRALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señalan actos como sujetos de reclamación, pero que no



En el caso, después de haber examinado la demanda y la totalidad de las constancias del expediente para fijar de manera clara y precisa la litis en el presente asunto, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados los especificados a continuación:

Autoridad responsable	Actos reclamados
1) Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.	a) La omisión de atender su solicitud de Registro de Víctimas presentada el dieciséis de enero del año en curso.

que emanan del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tesis aislada P. VI/2004 (registro 181810).

ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO, MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se negan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun así, fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanan del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rigurosa e íntegra del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente pueda ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la resta precisa de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. Tesis aislada II.Sa.A.23 K (10a.) (registro 2007130).

SENTENCIAS DE AMPARO, DEBEN REFLEJAR LO EFECTIVAMENTE RECLAMADO POR EL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 5 DE ABRIL DE 2013). De las previsiones que contiene la Ley de Amparo vigente en su artículo 74, se infiere que la fijación de los actos reclamados se encuentra íntegramente en el escrito en el que cada vez que se emite el fallo y cuyo objetivo es la correcta y completa resolución del caso. Por ende, el artículo citado no exige que, en ese aspecto, las sentencias reproduzcan intelectualmente lo señalado en el capítulo respectivo de la demanda o los informes justificados, sino que reflejen lo efectivamente reclamado por el quejoso; por lo que, para la debida comprensión de este punto, es necesario atender a la integridad de la demanda o, incluso, a cualquier otro elemento relevante en el juicio. Tesis aislada I.Sa.A.E.21 K (10a.) (registro 20086889).

DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es inquestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalan como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el Juez de Distrito deje de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los

2) Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	b) La emisión del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVJI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro.
--	--

Tercero. Existencia de los actos reclamados. La emisión de un pronunciamiento sobre la existencia del acto reclamado es –por razón de técnica– un aspecto indispensable para resolver lo conducente en relación con las causas de improcedencia hechas valer o advertidas de oficio y para analizar el fondo de la cuestión planteada en este asunto.

A fin de emitir tal pronunciamiento, en primer lugar, es conveniente saber que las disposiciones normativas generales señaladas como actos reclamados en un juicio de amparo no pueden ser objeto de prueba porque su existencia debe tenerse por acreditada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, o bien, en el respectivo medio oficial de difusión.³

En segundo lugar, es oportuno tener presente que, fuera de esa hipótesis, la existencia de los actos reclamados debe ponderarse en función de lo alegado por la autoridad responsable en su informe justificado y que, si ésta ha omitido rendirlo, debe presumirse su certeza conforme a lo establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo salvo prueba o hecho notorio en contrario.

De modo que, en caso contrario, esto es, cuando la autoridad rinde dicho informe, debe distinguirse si reconoció la existencia del acto reclamado, para tenerlo por cierto con base en lo manifestado por ella; o bien, si lo negó, para entonces ponderar la naturaleza de dicho acto y conjugarla con las reglas que rigen en materia probatoria a fin de determinar si debe tenerse por cierto –o no– a partir de tales elementos.

Finalmente, es pertinente considerar que si el acto reclamado es de naturaleza positiva y la autoridad responsable niega su existencia, la carga probatoria se trasladará a la parte quejosa y, por consiguiente, ésta deberá aportar los elementos que estime



necesarios para desvirtuar esa negativa antes de la celebración de la audiencia constitucional⁴.

En cambio, si son de naturaleza omisiva y la autoridad responsable niega su existencia, será indispensable verificar si ésta se encontraba en aptitud legal de realizar la actuación exigida por la parte quejosa, ya que, de ser el caso, la omisión atribuida deberá tenerse por cierta salvo prueba en contrario; mientras que, de no ser así, deberá tenerse por inexistente y, en consecuencia, se deberá sobreseer en el juicio⁵.

Ahora bien, de una revisión de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la información esquematizada a continuación:

Autoridad responsable	¿Rindió su informe justificado?	
	Si	No
1) Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.	X	
2) Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México	X	

Asimismo, en relación con la existencia de los actos reclamados, de tales informes se obtiene la información esquematizada enseguida:

⁴ Es aplicable el siguiente criterio:

ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLICUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de ese conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógicamente ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones. Jurisprudencia SaJJ. 35/90 (registro 207114)

Asimismo, son ilustrativos los siguientes criterios:

ACTO RECLAMADO. NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por que el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dudar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la atención del interés jurídico del quejoso, el acto omisivo de la autoridad, asimismo,

Autoridad responsable	¿Reconoció la existencia del acto que le fue reclamado?	
	Sí	No
1) Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.		X
2) Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México		X

III.1 Actos existentes.

Atento a ello, se tiene por **cierta** la omisión reclamada que se le atribuye a las autoridades responsables, pues si bien lo negaron, de un análisis realizado al marco normativo que prevén sus atribuciones, esta juzgadora advierte que ciertamente tienen competencia legal para intervenir y gestionar la emisión de un pronunciamiento respecto de la solicitud que formuló la parte quejosa y, por ende, igualmente para realizar la conducta exigida por ella.⁶

⁶Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Artículo 135.-Con el fin de lograr una atención integral hacia las víctimas, la Comisión de Víctimas contará con un Comité Interdisciplinario Evaluador, que es el área encargada de emitir opiniones técnicas sobre la inscripción de las solicitudes de las víctimas al Registro y de elaborar los proyectos de compensación subsidiaria para que sean aprobados, en su caso, por la Comisión de Víctimas. Son atribuciones del Comité Interdisciplinario Evaluador:

- I. Recibir solicitudes y elaborar los dictámenes de ingreso al Registro y emitir las constancias respectivas;
- II. Solicitar a las víctimas, sus familiares, dependencias e instituciones, el esclarecimiento de aspectos dudosos que se adviertan en las solicitudes de inscripción de víctimas al Registro;
- III. Solicitar a las dependencias e instituciones del Sistema de Atención, información complementaria sobre las características del hecho victimizante, a efecto de integrar de manera completa la información que se incorporará al Registro;
- IV. Elaborar los dictámenes de negativa de ingreso al Registro y, en su caso, los de cancelación de mismo, así como emitir las constancias respectivas y;
- V. Analizar la información de las declaraciones, solicitud de inscripción y el expediente de la víctima respecto del hecho victimizante, y remitir a las personas titulares de la Asesoría Jurídica, de la Asesoría en materia penal y del Registro, para que adopten las acciones conducentes por cuenta, a medidas de asistencia y atención, así como a reparación integral.

Reglamento de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Artículo 22. En el caso de que la solicitud de ingreso al Registro contenga el reconocimiento de las autoridades señaladas en el artículo 4, fracción I, II, III y IV de la Ley, recibida la solicitud respectiva, el Registro procederá a la inscripción respectiva, siempre que se haya cumplido formal y cualitativamente con la información recogida en el Formato Único y de la documentación que acompaña y soporta dicho formato, tratándose de delitos de alto impacto social y/o de violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, a que se refiere el siguiente artículo.

No obstante, el Registro podrá solicitar a las autoridades jurisdiccionales información complementaria a fin de sustentar los requisitos señalados en los artículos 4, fracción I, II, III y IV de la Ley.



Aunado a lo anterior, del análisis del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOV/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro, se observa que lo suscribió el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, debido a que fue expedida por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones⁷.

Cuarto. Oportunidad. Si bien por regla general, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, los cuales deben computarse a partir que de la persona que acude haya tenido conocimiento fehaciente, se haya hecho sabedora o, en su caso, a partir de que haya surtido efectos la notificación correspondiente, en términos del artículo 18 de la ley reglamentaria.

valoración adicional, en términos del artículo 3 y 23 del presente Reglamento, en relación con el artículo 4, fracción V de la Ley, el Comité Interdisciplinario previa remisión del expediente por el Registro, en su caso, emitirá un dictamen de ingreso favorable, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, mismo que remitirá al Registro, conjuntamente con el expediente, a fin de que proceda a la inscripción en el Registro de Víctimas.

En caso contrario, o bien, tratándose de delitos que no se consideren de alto impacto social o violaciones graves y trascendentes en derechos humanos, el Comité Interdisciplinario emitirá un dictamen de negativa, debidamente fundamentado y motivado, mismo que será remitido al Registro para la emisión del acuerdo de negativa de inscripción al Registro y sea notificado a la persona usuaria respectiva, en un plazo no mayor a diez días hábiles.

Artículo 23. Para el ingreso al Registro de Víctimas, la Comisión Ejecutiva remitirá al Comité Interdisciplinario Evaluar la solicitud a efecto de analizar y valorar la procedencia de admisibilidad mediante la opinión técnica, dictámenes y constancia que en su caso emita.

El análisis para determinar al Registro considerará además del enfoque transversal de género y diferencial lo siguiente:

- I. Las circunstancias particulares de la víctima y del hecho victimizante;
- II. Las circunstancias de vulnerabilidad;
- III. La dimensión e impacto de la gravedad del daño producido en la víctima; y
- IV. El tipo y la naturaleza del delito y, en su caso, las violaciones a derechos humanos.

Artículo 28. Corresponde al Comité Interdisciplinario, las siguientes facultades y obligaciones: [...]

- V. Elaborar los dictámenes de ingreso o negativa al registro, y emitir las constancias respectivas, según corresponda, en los casos que se regulara valoración adicional, de conformidad con la Ley y el presente Reglamento;

⁷ Disposiciones normativas que establecen lo siguiente.

ARTÍCULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación esté encomendada por la ley, derive de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, cuando se está frente a omisiones, debido a que sus efectos son de tracto sucesivo porque se producen de manera continua, el plazo de quince días al que se hizo referencia no transcurre. De manera que, *prima facie*, se puede promover en cualquier tiempo.⁶

De forma que, si estamos ante un acto de carácter omisivo, como en la especie ocurre, la promoción de la demanda debe estimarse oportuna.

Quinto. Causas de improcedencia. En el juicio de amparo es posible impugnar normas generales, actos u omisiones cuando vulneren derechos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, inclusive, cuando esa vulneración se origine por la contravención al régimen de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Por ello, es un mecanismo jurisdiccional de control constitucional que tiene la finalidad de restituir el goce de tales derechos.

La improcedencia de dicho mecanismo, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conlleva la actualización de un impedimento técnico para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva la cuestión planteada en la demanda y, por ende, supone algunas circunstancias -de hecho o de derecho- que impiden que la parte quejosa logre la satisfacción de su pretensión mediante la acción de amparo e implica, según el momento procesal, el desechamiento de aquélla o el sobreseimiento en el juicio.

Tales circunstancias están previstas como hipótesis en el artículo 61 de la Ley de Amparo; y, según lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser interpretadas restrictivamente para que la salvaguarda de la Constitución y de los derechos humanos mediante el juicio de amparo sea efectiva y no

⁶ Inter alia: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se refiere o declara expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado, en tanto que en los omisivos se sostiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacer en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el momento de la negativa y es la que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prolonga en el tiempo de inacción o momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. Tesis: III.5o.C.21 K (régimen 176/76).



ilusoria. De ahí que, ante distintas interpretaciones sobre su contenido o aplicación, es indispensable acoger la que evite dejar en estado de indefensión a la parte quejosa⁹.

I.Omisión de atender su solicitud de Registro de Víctimas presentada el dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

Sentado lo anterior, con independencia de las causales de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, esta juzgadora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el acto consistente en la omisión de atender y resolver su solicitud de Registro de Víctimas presentada por la quejosa el dieciséis de enero del año en curso.

El citado artículo dispone:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XXI. cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado.

Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo; para lo cual, en caso de obtener sentencia favorable, el efecto de la misma será restituir al quejoso en goce del derecho violado.

Bajo esa lógica, la Ley de Amparo establece la improcedencia de la acción constitucional contra actos reclamados que hayan destruido la totalidad de sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, ya que sería ocioso emprender el estudio de dichas violaciones si, en jurídica y materialmente, las cosas volvieron al estado en que se encontraban derivado de la propia actuación de la autoridad responsable.

En ese sentido, una condición necesaria para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio es que los efectos del acto reclamado hayan quedado destruidos en su totalidad, ya que de subsistir alguno o algunos de ellos en la esfera jurídica del quejoso, no podría considerarse lógicamente que cesaron los efectos y consecuencias del acto reclamado.

• **Análisis del caso concreto**

Establecido lo anterior, en el caso concreto, cabe recordar que la parte quejosa presentó una solicitud de Registro de Víctimas presentada el dieciséis de enero del año en curso.

En respuesta a lo anterior, el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México emitió el oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro; por el cual, se le informa a la quejosa que su solicitud sería turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador, para su resolución.

Constancias que tienen el carácter de una documental pública que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Bajo esas premisas, este órgano jurisdiccional considera que la omisión reclamada por la parte quejosa cesó en cuanto a sus efectos, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México abandonó la conducta omisiva reclamada y, en su lugar, emitió el oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro; por el cual, se le informó a la quejosa que su solicitud sería turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador, para su resolución.

De lo que se desprende que los efectos de la omisión reclamada quedaron totalmente destruidos durante la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que la autoridad responsable ejerció sus atribuciones en los términos pretendidos por la parte quejosa –atender la solicitud presentada el dieciséis de enero del



ordenamiento, procede sobreseer en el juicio de amparo, en relación con la omisión de atender la solicitud presentada el dieciséis de enero de la presente anualidad.

II. Emisión del oficio CEAVIDCMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

Siguiendo con el análisis de las causas de improcedencia, esta juzgadora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en la emisión del oficio CEAVIDCMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro. Para justificar tal aserto, es necesario acudir al contenido de dicho precepto, el cual dispone:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

...

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Quando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

El primer párrafo de la fracción transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de un procedimiento, ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio y se produce un diverso acto que trae como resultado un cambio de situación jurídica en el procedimiento referido, de manera tal que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto impugnado.

de situación jurídica, por regla general, se actualiza cuando se cumplen con los siguientes requisitos:¹⁰

- a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio;
- b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso producto del acto que reclamó en el amparo;
- c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo;
- d. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.

Respecto del primer requisito, consistente en que el acto reclamado debe provenir de un procedimiento ya sea judicial o administrativo seguido en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003¹¹ señaló que la expresión "procedimiento en forma de juicio" comprende aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre las partes contendientes, *así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva aun cuando sólo se trate de un trámite para cumplir con la garantía de audiencia*. De esta forma, no es suficiente que el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo, sino que tal procedimiento debe seguirse en forma de juicio.¹²

¹⁰ Este requisito se introdujo por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CO/96 con registro 199/96 de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL."

¹¹ Dicha tesis fue el rubro agregado: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIAS ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR."

¹² CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ESTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INTERVENIENTE. (2003).



En lo relativo a que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica del quejoso respecto del procedimiento supone la existencia de una situación determinada y la posterior emisión de una resolución que tenga como consecuencia la creación de una diversa situación jurídica que sustituye a la anterior. Así, el cambio de la situación jurídica resulta de las etapas en que normalmente se va desarrollando un proceso, esto es, se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando paso a que se inicie una nueva etapa o situación; lo anterior, en el entendido de que el cambio debe operar en el mismo procedimiento de donde emanar los actos reclamados.¹³

Por lo que hace a que el acto reclamado no pueda ser analizado sin afectar la nueva situación jurídica en el procedimiento, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, los órganos del Poder Judicial de la Federación han precisado que la irreparabilidad a que hace alusión esta fracción es jurídico procesal y no física o material pues no existe imposibilidad de esta naturaleza para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero sí un impedimento jurídico para ello.¹⁴ En este orden, se afirma que en la improcedencia que se analiza opera una irreparabilidad jurídica procesal debido a que en realidad no existiría imposibilidad física

tante, si en un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de respuesta a una solicitud de regularización del procedimiento de contratación pública y, previo a la emisión de esa contestación, culminó el procedimiento con el dictado del fallo definitivo, se actualiza un cambio de situación jurídica que torna improcedente el juicio de amparo, en razón de la situación procesal, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a los actos reclamados ya no está regida por éstos, sino por la nueva resolución administrativa. En ese sentido, las violaciones que al quejoso hubiese afectado que acontecieron en el procedimiento de federación y sobre las cuales versaron los escritos presentados ante la autoridad reclamada y a sus respectivas respuestas, quedan irremediablemente consumadas en tanto que no pueden verse sin afectar o determinarse en la oportuna determinación administrativa."

¹³ En este sentido se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada con registro 35/574 de rubro y contenido: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causa que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que existen los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica."

¹⁴ Tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 22/981, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la materialidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubieran ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, al permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la jurisdicción en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no pueda violarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que causó justificar legítimamente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una restricción de la senda constitucional al conceder al amparo invocando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni cuestionada ni resultado confirmada a derecho, así es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal en esta materia de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la persona frente al orden jurídico derivada de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe producirse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y

alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad porque la situación jurídica hubiese cambiado.¹⁵

Por último, en cuanto a la autonomía o independencia que debe existir entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, se explica en el sentido de que entre las actuaciones procesales que generaron una y otra situación jurídica no exista un vínculo de subordinación, sino que sean independientes entre sí, de manera tal que aun cuando la situación jurídica reclamada en primer término adolezca de vicios que pudieran determinar su ineficacia jurídica la nueva situación pueda subsistir aunque la primera se invalidara.

Es importante advertir que si bien, en términos genéricos, el procedimiento se entiende como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, usualmente, la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad.¹⁶

Así pues, los requisitos enunciados configuran la improcedencia del juicio de amparo en términos de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por ende, la ausencia de alguno de ellos tendrá como consecuencia desestimar la causa de improcedencia prevista en el citado dispositivo legal.

• *Análisis del caso en concreto.*

¹⁵ Sobre este aspecto son ilustrativas las siguientes citas: sugiere que en los siguientes: "EXTRADICCIÓN, CONCLUYÓ UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DAVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADICCIÓN, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSIDERADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA INTERVENCIÓN DE LA TESIS "PLENARIA XLIV" así como la jurisprudencia: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL, EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVAN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIGE UNA CUESTIÓN DE FSA NATURALIZA, LO HACE IMPROCEDENTE AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA".

¹⁶ Resulta ilustrativa la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CX/86, con registro 198607, de rubro y contenido siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, OPERA SI SE RECLAMA LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA ANTES DEL EMPLAZAMIENTO EN EL INTERDICTO PARA RECUPERAR LA POSesión Y EL USO DE LA FSA NATURALIZA, LO HACE IMPROCEDENTE AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA".



Sentado el anterior marco normativo, es preciso recordar que en la ampliación de la demanda de amparo se señaló como acto reclamado el siguiente:

Autoridades responsables	Acto reclamado
Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.	La emisión del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

Ahora bien, a efecto de determinar si se colman los requisitos para que se actualice el motivo de improcedencia, cabe tener presente los siguientes antecedentes del expediente que integran la solicitud de dieciséis de enero del año actual.

1. El *dieciséis de enero del dos mil veinticuatro*, la parte quejosa presentó una solicitud de inscripción al registro de víctimas.

Acto reclamado

2. Posteriormente, el Coordinador del Registro Local de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México emitió el *emisión del oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 de diez de septiembre de dos mil veinticuatro*; por el cual, se le informó a la quejosa que su solicitud sería turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador para su resolución.

Resolución en el procedimiento administrativo.

3. El Coordinador del Registro de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, emitió el oficio **CEAVICDMX/DFV/RELOVI/45/2025** de *veintidós de enero del año en curso*, mediante el cual concluyó que la solicitud de registro de víctimas de la Ciudad de México de la parte quejosa resultaba improcedente e informó que en contra de dicha determinación procedía el recurso de reconsideración previsto en el numeral 62 del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Asimismo, con posterioridad a la a la presentación de la demanda de amparo se emitió una resolución que *cambió la situación jurídica* en que se encontraba la quejosa producto del acto que reclamó en el amparo.

Ello, pues en el oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 – acto reclamado– se le informó a la parte quejosa que su solicitud sería turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador para su resolución, sin embargo, con posterioridad se emitió la resolución contenida en el oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/45/2025 de *veintidós de enero del año en curso*, mediante el cual concluyó que la solicitud de registro de víctimas de la Ciudad de México de la parte quejosa resultaba improcedente e informó que en contra de dicha determinación procedía el recurso de reconsideración previsto en el numeral 62 del Reglamento de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

De esa manera, con posterioridad a la presentación de la demanda se emitió la resolución que cambió la situación jurídica de la quejosa, en tanto que se declaró improcedente la solicitud de la promovente.

Aunado a lo anterior se cumple con el requisito de que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, dado que el oficio CEAVICDMX/DFV/RELOVI/701/2024 quedó superado por la diversa resolución CEAVICDMX/DFV/RELOVI/45/2025, por lo que es la determinación que ahora afecta los intereses de la quejosa y subsiste.

Finalmente, también existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede ~~sobreseer~~ en el presente juicio de amparo en contra del acto reclamado consistente en la emisión del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 3-1

2025, Año de la Mujer Indígena

Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

Notifíquese a las partes de la siguiente forma:

Parte	Notificación
Quejosa	Lista
Autoridad responsable	Oficio
Tercero interesado	No existe
Ministerio Público Federal	Lista

Lo proveyó y firma **Minerva Herlinda Mendoza Cruz**, Jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de **Emma Cristina Carlos Avalos**, que certifica que las promociones que en su caso se generaron y la propia resolución, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico **Doy fe**

Jueza de Distrito

Secretaria

S.I.S.E	Actuaria	Agenda
Sentencia, Fecha de sentencia, Causal de improcedencia (Ley de Amparo vigente artículo 61), Fundamento del sobreseimiento (Ley de Amparo vigente artículo 63), Sentido de sentencia o resolución que puso fin al juicio.		

En la misma fecha, se giraron los oficios 9253 y 9254, a fin de notificar a las partes el acuerdo que antecede. Conste.



Firmante(s): 2

[illegible]

[illegible]

